LA ESTRELLA DE IQUIQUE

Fecha: 09/08/2025 Audiencia: 28.500 Sección: OPINION
Vpe: $290.489 Tirada: 9.500 Frecuencia: DIARIO
Vpe pág: $1.251.750 Difusión: 9.500
Vpe portada: $1.251.750 Ocupación: 23,21%

EDITORIAL

Avanzar en los sumarios

El Ministerio de Hacienda entregó el tercer balance sobre los sumarios en el gobierno central relacionados con el escándalo de las licencias médicas en el sector público, detallando que casi 1.700 funcionarios involucrados han dejado sus cargos.

Según el informe, al 15 de julio se habían identificado 10.961 funcionarios vinculados a casos de mal uso de licencias médicas en el gobierno central, 2.147 más que en el reporte de junio. De ellos, 9.293 continúan en funciones, mientras que 1.668 ya no se desempeñan en sus puestos.

En este tercer reporte, se detectaron 10.173 funcionarios a quienes se les aplicará sumario administrativo. De estos, 10.038 mantienen el proceso en curso, 80 ya lo tienen cerrado y 55 cuentan con una resolución que está en proceso de cierre.

En el caso de Tarapacá, sin embargo, no existen reportes sobre el avance de los sumarios ni sobre sanciones derivadas de estos procedimientos, originados a partir de los informes de la Contraloría General de la República.

> “La situación actual representa una oportunidad para establecer protocolos que prevengan este tipo de irregularidades”.

En la región, las municipalidades y servicios como Educación, Salud e incluso universidades concentran un alto número de casos. Por ello, es fundamental que estos procesos avancen y se informen públicamente, para evitar la percepción de que todo quedará en nada, como ha ocurrido con otras polémicas que han afectado a la administración del Estado.

Cuando funcionarios públicos utilizan licencias médicas para salir del país, no solo generan un perjuicio económico al erario público, sino que también sobrecargan el trabajo de quienes sí cumplen con sus labores, afectando así la calidad del servicio que se entrega a la ciudadanía.

La situación actual representa una oportunidad para establecer protocolos que prevengan este tipo de irregularidades, tanto en la administración pública como en el ámbito privado, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa.

Es de esperar que todas estas denuncias se resuelvan y que este tipo de prácticas no se repitan, evitando que se conviertan nuevamente en parte de una cultura de irregularidad, como lamentablemente se percibió en los últimos años.